



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

Demandante: LUIS FERNANDO ZAPATA GÓMEZ  
Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y COLPENSIONES  
Radicado: **05001 31 05 025 2022 00007 01**  
Sentencia: S-054

### **AUTO**

En atención a la escritura pública 7778 del 2 de octubre de 2023, allegada al expediente, se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. RODA MARÍA GONZÁLEZ CIFUENTES portadora de la T.P. N° 321.786 del C. S. de la Judicatura, para representar a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. en el presente proceso.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a revisar en **grado jurisdiccional de consulta** en favor de COLPENSIONES, la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de noviembre de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

## PRETENSIONES

LUIS FERNANDO ZAPATA GÓMEZ demandó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y a COLPENSIONES, pretendiendo se **declare** que tiene derecho al pago de los aportes en pensiones por parte de EPM E.S.P., durante el período comprendido entre el **1° de julio de 2004 y el 30 de septiembre de 2010**, ya que por una decisión unilateral y arbitraria de su empleador se suspendió unilateralmente el pago de tales aportes, vulnerando su derecho a decidir u optar si continuaba o no cotizando al sistema, incumpliendo el deber de información, lo que le causó un perjuicio en el derecho de contar con una mejor pensión proporcional al tiempo laborado en la empresa, con los salarios percibidos desde el 1° de julio de 2004 y el 30 de septiembre de 2010. En consecuencia, pretende se profieran las siguientes CONDENAS:

*“(…) **DUODÉCIMA: CONDENE a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP** para que liquide a favor de mi poderdante y gire a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, todos los aportes a la Seguridad Social en Pensiones dejados de cotizar, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2010, a través del cálculo actuarial que debe ser realizado con base en los salarios que devengaba mi poderdante en el referido periodo, debidamente indexados.*

***DÉCIMA TERCERA: CONDENE** a Colpensiones a emitir y notificar a EPM ESP la liquidación del cálculo actuarial, para que luego de efectuado el pago por **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP**, COLPENSIONES incorpore en la historia laboral de mi poderdante los períodos no cotizados 01 de julio de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2010.*

***DÉCIMA CUARTA:** Efectuado el nuevo cálculo del Ingreso Base de Liquidación -IBL- de los últimos 10 años laborados por mi poderdante hasta el 30 de septiembre de 2010, **CONDENE a COLPENSIONES** a pagar a mi poderdante el valor adicional de lo que hoy se está pagando por concepto de mesada pensional desde el 30 de septiembre de 2010, debidamente indexados, con los intereses moratorios del artículo 23 de la Ley 100 de 1993.*

**DÉCIMA QUINTA: CONDENE** en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, en síntesis, que laboró desde el 13 de septiembre 1976 hasta el 30 de septiembre de 2010 al servicio de EPM E.S.P. en calidad de trabajador oficial, mediante contrato a término indefinido; que el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en pensiones se realizó hasta el 31 de junio de 2004, pues a partir del 1º de julio de 2004 y hasta el 30 de septiembre de 2010 EPM E.S.P. no le realizó aportes a pensiones. Indica que el IBC para el período 2004-06 fue por la suma de \$3.281.000, y para el período 2010-09 de \$4'650.613.

Señala que en la certificación con radicado 20210130184146 del 15-10-2021, textualmente se le informa que *“Después de realizar la búsqueda en gestión documenta (sic) en la historia laboral no fue encontrada la carta de cesación de aportes”*; que EPM E.S.P. desconoció el derecho de optar o decidir por continuar pagando las cotizaciones voluntarias a pensiones desde el 1º de julio de 2004 hasta la fecha de retiro definitivo del servicio, hecho este ocurrido el 30 de septiembre de 2010; que, además, EPM E.S.P. incumplió el deber de brindarle una información suficiente, objetiva, oportuna, completa y cierta, previo a la cesación unilateral de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuando cumplió el requisito de la edad y tiempo de servicio para acceder a la pensión de vejez.

Indica que se desempeñó como Profesional B Contratación, siendo sus conocimientos precarios en aquel tema, de manera que cuando EPM E.S.P. tomó su decisión de cesar unilateralmente los pagos de los aportes en pensiones no tenía información sobre los temas jurídicos relacionados con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, ni sobre normatividad o jurisprudencia existente sobre la materia.

Expresa que los efectos negativos de la cesación de aportes se evidenciaron cuando COLPENSIONES realizó la liquidación deficitaria de la pensión, sin tener en cuenta los salarios devengados del 1° de julio de 2004 al 30 de septiembre de 2010. Advierte que sí EPM E.S.P. hubiese informado su derecho a continuar cotizando, señalándole las consecuencias o efectos negativos que tendría en su pensión en el evento de no hacerlo, hubiera seguido cotizando, reiterando que EPM E.S.P. no contó previamente con su expresa aquiescencia o consentimiento, y decidió plasmar su decisión unilateral de cesar los aportes en la circular interna N° 1197 del 19 de junio de 2002, la cual tenía una decisión general y que fue injusta al generar un pago del 100% de los aportes en pensiones en cabeza del trabajador. Y que no haber brindado una respuesta, no puede tomarse como un silencio tácito de aceptación o conformidad con lo decidido por EPM.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., a los hechos, dijo admitir que el accionante laboró del 13 de septiembre de 1976 hasta el 30 de septiembre de 2010, en el cargo de Profesional B Contratación en calidad de trabajador oficial; es cierto que cesó en sus aportes en pensiones a partir del 30 de junio de 2004, con fundamento en el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales citadas en la respuesta a la reclamación administrativa y no a un retiro arbitrario por parte de EPM E.S.P. Agrega que ello obedeció al estricto cumplimiento de un deber legal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 692 de 1994. Admite también la certificación expedida con radicado 20210130184146 del 15 de octubre de 2021, en donde se le informa que el trámite de cesación de aportes solo fue implementado de forma escrita durante el año 2008, y admite los IBC reportados; que la decisión de cesar las cotizaciones fue aceptada por el demandante por cuanto no manifestó su intención de continuar

cotizando, suspendiendo los aportes a pensión el 30 de junio de 2004; que el cese de cotización se informó a través de la circular 1197 del 19 de junio de 2002 y también se dio en cumplimiento al requerimiento de la Contraloría General de Medellín, órgano de control que así lo solicitaba, además de la jurisprudencia que existía para ese momento del Consejo de Estado que obligaba a dejar de realizar cotizaciones. Aduce que la voluntad del demandante era pensionarse, y no reposa en el expediente prueba que dé cuenta que el actor manifestó voluntariamente su intención de continuar cotizando al Sistema de Pensiones, y que no le consta la resolución de reconocimiento pensional por parte de COLPENSIONES.

Se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto no se le han vulnerado derechos al demandante y propuso como excepciones violación de la seguridad jurídica por aplicación retroactiva del precedente judicial, falta de legitimación por pasiva, carencia de acción y derecho sustancial para pedir, inexistencia sustancial del derecho, pago total, cotizaciones para efectos pensionales realizadas de manera completa y en términos de la ley que regula la materia y prescripción.

COLPENSIONES, en su contestación, expuso que no le consta ninguno de los hechos que van dirigidos en contra de EPM E.S.P.; que es cierta la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES, efectuándose la liquidación de la pensión con el total de semanas cotizados por el actor sin tener en cuenta los periodos dejados de cotizar por el empleador EPM, ateniéndose a lo que resulte probado dentro del proceso. Se opuso a las pretensiones por carecer de fundamentación fáctica y legal. Como excepciones planteó la de inexistencia de la obligación de recibir aportes a seguridad social retroactivamente, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios e indexación, autorización de realizar descuentos en salud, prescripción y compensación.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2023, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, profirió las siguientes condenas:

- 1) **DECLARÓ** que al demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago del cálculo actuarial por la omisión en el pago de aportes a pensiones por el período comprendido entre el 1° de julio de 2004 y el 30 de septiembre de 2010, a los cuales estaba obligado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.;
- 2) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a que, dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, efectúe la liquidación del cálculo actuarial a favor del actor y a cargo de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP por los períodos comprendidos entre el 1° de julio de 2004 y el 30 de septiembre de 2010, incluyendo los respectivos intereses de mora;
- 3) **CONDENÓ** a EPM a reconocer y pagar a favor del demandante, el Título Pensional por los períodos indicados, según cálculo actuarial que realice COLPENSIONES, el cual deberá ser pagado por la entidad dentro de los 15 días siguientes a la notificación que del cálculo actuarial realice COLPENSIONES a EPM;
- 4) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a que dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y una vez actualice la historia laboral del demandante con la totalidad de semanas laboradas por éste, proceda a emitir un nuevo acto administrativo a través del cual se reliquide la pensión de vejez que le fue reconocida al actor, de conformidad con la tabla que se anexa al presente fallo, en cuantía de \$5.930.954 a partir del 1° de diciembre de 2023, por trece mesadas, con los respectivos incrementos anuales previstos por la Ley;

5) **CONDENÓ** a COLPENSIONES al reconocimiento y pago, en favor del demandante, el reajuste pensional causado entre el 11 de noviembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2022, por valor de \$15.584.365 el cual deberá ser indexado al momento de su pago;

6) **AUTORIZÓ** a COLPENSIONES a descontar del retroactivo por mesadas pensionales ordinarias, el porcentaje correspondiente al valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, advirtiéndole que las debe trasladar a la Entidad Promotora de Salud en la que se encuentre el demandante;

7) **ABSOLVIÓ** a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP y a COLPENSIONES de las demás pretensiones invocadas en su contra;

8) **DECLARÓ** probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por COLPENSIONES e improbadas las demás excepciones;

9) y **CONDENÓ** en costas a EPM E.S.P. y a favor del demandante.

El presente asunto se conoce en grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, dado que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término concedido para alegar de conclusión, EPM E.S.P. señaló que se debe revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que la suspensión de los aportes de 2004 a 2010 se dio como consecuencia a la acción de cumplimiento que iniciaron varios trabajadores de EPM y en la que solicitaron que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN diera cumplimiento al artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 19 de Decreto 692 de 1994, diferente al panorama que hoy tiene la Corte; señala que no es procedente ordenar a EPM el pago de aportes dejados de suspender, debido a que existe un fallo judicial que

no ha sido revocado y que incluso, dictar una sentencia en contra vulnera los efectos de las sentencias dictadas dentro de la acción de cumplimiento; indica que a través de la sentencia C-529 de 2010, se declaró exequible la suspensión o extinción de la obligación de cotizar a los regímenes del sistema general de pensiones. Manifiesta que los fondos de pensiones también tienen la obligación de brindar asesoría pensional. Señala que aplicar de manera retroactiva el cambio jurisprudencial vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima a situaciones consolidadas con base en la posición jurisprudencial imperante con la que se sustentó la decisión de cesar los aportes, adicionalmente, se desconoce el precedente vinculante para EPM vertido en la acción de cumplimiento. Y que no son procedentes las costas impuestas, ya que EPM ESP llegó a la etapa de conciliación con el ánimo de conciliar las pretensiones propuestas por el demandante en el proceso, en cuanto no se opone al pago del cálculo actuarial por el tiempo laborado no cotizado.

### **CONSIDERACIONES**

Procede la Sala a revisar en grado jurisdiccional de consulta la validez jurídica de la decisión que en su momento asumió la empresa demandada, cuando cesó en el pago de los aportes al sistema de pensiones correspondientes al Sr. LUIS FERNANDO ZAPATA GÓMEZ, a partir del 1º de julio de 2004 y hasta el 30 de septiembre de 2010, fecha en que se produjo su retiro de la empresa. Decisión fundada en el cumplimiento de los requisitos por parte del funcionario para el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguro Social, invocando el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994.

Agréguese a lo anterior, que el demandante no manifestó en aquel momento, su intención de continuar cotizando al sistema pensional.



Previo a lo precedente, importa destacar los siguientes hechos sobre los cuales no existe discusión alguna en el proceso:

- i) El señor LUIS FERNANDO ZAPATA GÓMEZ prestó sus servicios a EPM E.S.P., entre el 13 de septiembre 1976 hasta el 30 de septiembre de 2010, pero efectuó cotizaciones al sistema general de pensiones solo hasta el 31 de junio de 2004.<sup>1</sup>
- ii) Por medio de la resolución 028201 del 31 de octubre de 2007<sup>2</sup>, el otrora ISS – ahora COLPENSIONES - le concedió la pensión de vejez al demandante en cuantía mensual de \$2'751.935 para el año 2007, la cual se dejó en reserva hasta tanto el afiliado acreditase el retiro definitivo de la entidad pública.
- iii) A su vez, mediante resolución 017713 del 20 de septiembre de 2010<sup>3</sup>, COLPENSIONES empezó a reconocer la pensión de vejez al actor a partir del 1º de octubre de 2010, en cuantía de \$3'194.235, liquidada sobre un IBL de \$4'258.981, al que aplicó una tasa de reemplaza del 75%.
- iv) En la historia laboral<sup>4</sup> expedida por COLPENSIONES se observa que la última cotización al Sistema General de Pensiones correspondió al mes de junio de 2004, fecha en la que se reportó la novedad de retiro.

### **Cesación de aportes**

Con respecto a la intelección del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, en cuanto permite que el empleador, de forma unilateral, suspenda las cotizaciones en seguridad social en pensiones una vez el trabajador reúna las

---

<sup>1</sup> Respuesta solicitud de información por EPM de folio 74 de la demanda

<sup>2</sup> Folios 84 a 90 de la demanda

<sup>3</sup> Folios 82 a 89 de la demanda

<sup>4</sup> Folios 297 a 304 de la demanda y folios 19 a 26 de la contestación de Colpensiones

condiciones para acceder a la prestación de vejez, es preciso señalar que en un principio la jurisprudencia tenía aceptado que una vez se satisficieran los requisitos pensionales era posible la cesación de los aportes al sistema por parte del empleador, aunque podía el trabajador manifestar su intención de continuar cotizando con miras a incrementar el monto de la prestación. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1582 de 2018, al respecto señaló:

*“A juicio de la Sala, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, no permite otro entendimiento diferente al que la claridad de su texto ofrece, que no es otro que una vez el trabajador reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima por vejez, el empleador no está obligado a seguir cotizando, salvo que aquel exija lo contrario, en cuyo caso el patrono queda vinculado por esa determinación.*

*La norma no impone al empleador la obligación de anunciar la cesación del pago de los aportes, porque lo que regula es el fin de la obligación de pagar cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales y, en caso de que hubiera optado el demandante por continuar cotizando para mejorar el IBL de la pensión de vejez, le bastaba informar al Municipio de Medellín, para que se suscitara la obligación de hacerlo más allá de la fecha en que reunió los requisitos.”*

Sin embargo, esa forma de entender la norma varió parcialmente desde la sentencia SL2556-2020 y reiterada en las SL5082-2020, SL1184-2021, SL3006-2021, SL177-2023, SL1205-2023, SL2124-2023 y SL2476-2023, providencias que indican que es posible la suspensión del aporte, siempre y cuando exista la comunicación de tal actuar al trabajador, lo que debe hacerse en forma explícita como manifestación del deber de buena fe que rige en los contratos laborales. En la sentencia SL2556 de 2020 se precisó que,

*“A la luz de lo explicado, si bien el empleador puede dejar de cotizar al sistema general de pensiones cuando el trabajador cumple los requisitos pensionales, está en la obligación de informarle previamente a fin de que este decida si desea o no hacer uso de la opción de continuar cotizando. De lo contrario, la facultad consagrada en su favor en el inciso 3° del artículo 17 de la Ley 100 de*

*1993 se tornaría nugatoria si el empleador de forma unilateral e inconsulta así procede.*

*Adicionalmente, en virtud de la buena fe contractual, y con el fin de que el trabajador pueda ejercer la opción de manera informada y consciente, el empleador que pretenda suspender el pago de aportes al sistema de pensiones, conforme lo previsto en el inciso 2° del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, previamente deberá advertir al trabajador que tal actuar puede alterar el monto de la prestación."*

De igual forma, en lo que respecta a la posibilidad de que el trabajador pudiera seguir efectuando cotizaciones en forma voluntaria y frente al punto de que aquel debiese asumir la totalidad del aporte a su cargo, en la ya enunciada sentencia se expuso igualmente lo siguiente:

*"... no sobra mencionar que si bien el actual artículo 2.2.3.1.1. del Decreto 1833 de 2016 refiere que, si el afiliado desea seguir cotizando, luego de cumplir los requisitos pensionales, debe hacerlo «a su cargo», para la Corte, dicha disposición reglamentaria es incompatible con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, dado que este último no preceptúa que el 100% del costo de los aportes deba asumirlos en su totalidad el trabajador y mucho menos exime a los empleadores de su deber de contribuir al sistema en el porcentaje a que por ley están obligados. Asimismo, como se explicó en líneas anteriores, dicha interpretación, en la práctica, haría nulo el derecho legal que le asiste a los trabajadores de seguir aportando al régimen pensional."*

Ahora bien; por regla general, siempre que exista una relación laboral vigente y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la ley 100 de 1993, es forzoso realizar las cotizaciones tanto por parte de los afiliados - trabajadores - como de sus empleadores en los porcentajes que establece la ley; por excepción, en principio, quienes hayan reunido los requisitos de edad y tiempo de servicios establecido en la ley para pensionarse, es admisible que esas cotizaciones se suspendan, conforme a lo normado en el artículo 17 de la Ley 100.

No obstante, para una correcta hermenéutica de la situación, necesariamente debe traerse a colación el análisis realizado por la Corte

Constitucional en la sentencia C-529 de 2010, con ocasión del estudio sobre la constitucionalidad del citado artículo 17 de la ley 100 de 1993. En esta providencia, la C. Constitucional adoctrina que la decisión de continuar aportando al sistema no implica para el afiliado asumir la totalidad de la cotización, sino que tanto el trabajador como el empleador, deben sufragar el porcentaje que por ley les corresponde.

Adicionalmente, como quiera que el hecho de continuar realizando los aportes pensionales generalmente favorece al afiliado, pues con ello es posible obtener una mesada pensional superior, la manifestación de la voluntad de no seguir cotizando debe provenir de manera expresa y positiva del trabajador o del empleador, pero en este último caso con la aquiescencia expresa o tácita del trabajador.

Así fue entendido y explicado en la propia sentencia C-529 de 2010 de la cual se citan algunos de sus apartes:

*“Ahora bien: por virtud de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 17 de la Ley 100, (también demandado en el presente proceso), el afiliado que reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez puede seguir cotizando al sistema, voluntariamente. De hecho, es de la mayor conveniencia que lo haga, pues lo establecido en el ya citado artículo 34 de la Ley 100 de 1993, trae como consecuencia que, por regla general, un incremento en el número de semanas cotizadas, por encima del mínimo número de semanas requeridas, genera un incremento en el monto de la pensión, y además, le permite seguir contribuyendo a los instrumentos solidarios que hacen parte del sistema. **Por esta razón, y en virtud del carácter solidario del sistema pensional colombiano, y especialmente del RPMPD, para la Corte la decisión del afiliado de continuar voluntariamente cotizando es vinculante para su empleador, quien debe seguir haciendo los aportes correspondientes, si esa es la voluntad del afiliado.***

**De aceptarse que la decisión voluntaria del afiliado de seguir cotizando al RPMPD no genera una obligación concomitante para su empleador, la disposición contenida en el inciso 3° del artículo 17 de la Ley 100 –que permite la continuación voluntaria de las cotizaciones- devendría en inocua, y se violaría, en tal caso, el**

***principio de solidaridad, pues la voluntad de seguir aportando al sistema sólo generaría cargas para el afiliado y no para el empleador, distinción esta que carece de justificación y eximiría de su deber solidario, sin ningún respaldo constitucional, a los empleadores, que también tienen obligaciones frente al sistema pensional".*** (Destaca esta Sala)

Además de lo anterior, bien es verdad que la relación de trabajo constituye el móvil o hecho generador de las cotizaciones al sistema de pensiones; así lo tiene concebido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues, aunque analizando otros casos diferentes al presente, en términos generales tiene dicho que *"La actividad efectiva, desarrollada en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional a nombre del trabajador afiliado"*. En sentencia CSJ SL 34270 del 28 de oct. de 2008, dijo: *"En los términos del artículo 15 de la Ley 100/93, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral"*, y en la SL 759-2018, puntualizó: *"La cotización al sistema de pensiones se origina en la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras"*

Del recuento normativo y jurisprudencial transcrito, resulta evidente que el trabajador puede optar por continuar cotizando a pesar de tener cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, procurando mejorar el monto de su mesada pensional, decisión que implicaría, como obligación correlativa para el empleador, el deber de continuar realizando los aportes que a él le conciernen, en la forma en que lo venía haciendo.

Ahora, de folios 105 y 106 de los anexos de la contestación, se aportó por la parte opositora un documento titulado Circular 1197 del 19 de julio de 2002 - Carta Organizacional - dirigida de manera general a sus trabajadores en la que les comunica que dejaría de efectuar las cotizaciones en pensiones de quienes reunieron los requisitos

pensionales, misiva que da cuenta de una decisión unilateral en la que no medió la voluntad del trabajador, como tampoco se les informa acerca de la incidencia que esta decisión podría tener en su futuro pensional.

Por otro lado, al demandante nunca le fue allegado documento alguno, en concreto, mediante el cual se le comunicara en forma personal y directa la decisión de cesar los aportes en pensiones, pues como lo reconoció la entidad en la certificación 20210130184146 del 15 octubre de 2021, el trámite de cesación de aportes solo fue implementado de forma escrita a partir del año 2008.

Esto es, en suma, la situación se planteaba así: i) la cesación de aportes era una determinación sin reversa, tomada unilateralmente por la empresa e independientemente de sus razones jurídicas o del respaldo normativo y/o jurisprudencial; ii) el trabajador no tuvo en su poder documento alguno que le permitiera conocer directamente la decisión de la entidad empleadora de que cesaría en las cotizaciones en pensiones, ni tampoco una asesoría al respecto.

De esta manera, el vínculo laboral entre las partes continuó ejecutándose con posterioridad al cese de los aportes, es decir, 1º de julio de 2004 y hasta la terminación del nexo, el 30 de septiembre de 2010, lo que comportó una mengua en el monto pensional del demandante.

Lo anterior implica que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. tiene el deber de efectuar el pago de las cotizaciones a COLPENSIONES a través de la modalidad de título pensional conforme con lo establecido por el numeral d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la ley 797 de 2003, por el período comprendido entre el 1º de julio de 2004 al 30 de septiembre de 2010.

Así pues, se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia en tal sentido.

Es necesario señalar que no puede salir avante la prescripción de los aportes a la seguridad social por parte de EPM en COLPENSIONES, atendiendo a que el cálculo actuarial ordenado está ligado estrechamente con los aportes a pensión, y al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de instancia SL2206-2021, dentro del proceso con radicado 69645, indicó lo siguiente: *“En cuanto a la propuesta excepción de prescripción, se declara infundada porque el giro del cálculo actuarial es imprescriptible, según lo ha definido esta Corporación al señalar que se trata de «[...] aportes pensionales que constituyen capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación y, como consecuencia, están ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado» (CSJ SL738-2018)”*

### **Orden a COLPENSIONES**

Conforme a lo anterior, es deber de COLPENSIONES recibir los recursos a los que fue condenado EPM E.S.P., esto es, el cálculo actuarial en la forma y en los términos dichos por la juez, teniendo en cuenta para el efecto el IBC relacionado por la accionada en el archivo *“23PoderEpmyConcetoConciliacion”* del expediente digital y conforme el IBL consagrado en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, esto es, el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, aplicando para el caso de autos una tasa de reemplazo del 75%, toda vez que la pensión fue reconocida en virtud del régimen de transición de la ley 100 de 1993 y de acuerdo a lo dispuesto en la ley 33 de 1985, como lo estableció la resolución 028201 del 31 de octubre de 2007.

Una vez revisadas las operaciones aritméticas realizadas por la juez en el archivo *“24Liquidaciones”* del expediente digital, se observan ajustadas a derecho, pues se tuvieron en cuenta los períodos

comprendidos entre el 1º de julio de 2004 al 30 de septiembre de 2010, lo cual arrojó un IBL para el año 2010 por valor de \$4'467.108,93, y una mesada pensional de \$3'350.332 para el 1º de octubre de 2010 y de \$5'930.954 para diciembre de 2023.

Es claro que COLPENSIONES no solo deberá reajustar la pensión teniendo en cuenta el cálculo actuarial por el período comprendido entre el 1º de julio de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2010, sino que también deberá reconocer las diferencias pensionales retroactivas causadas, no obstante, se precisa que conforme al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el retroactivo de la reliquidación efectuado debe reconocerse a partir del **11 de noviembre de 2018**, pues si bien es claro que pasaron más de 3 años posteriores al reconocimiento del derecho pensional<sup>5</sup>, la reclamación a COLPENSIONES se realizó el 12 de noviembre de 2021<sup>6</sup>, por lo que el fenómeno de la prescripción debe salir avante parcialmente, y una vez revisado el retroactivo pensional liquidado por la juez del 11 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2023, este también se ajusta a derecho.

De igual forma, procede la indexación de la condena por reliquidación pensional, teniendo en cuenta que este es el mecanismo apropiado para combatir el defecto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y por tal razón, se condenará a COLPENSIONES, a reconocer este concepto cuyo cálculo debe efectuarse por la entidad desde la causación hasta la fecha efectiva del pago de la obligación.

Por último, es acertado lo manifestado por la juez en lo que respecta a los descuentos en salud, en virtud de lo previsto en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, debiendo COLPENSIONES deducir del valor del retroactivo pensional los aportes

---

<sup>5</sup> 1º de octubre de 2010

<sup>6</sup> Folios 99 a 104 de la demanda



pertinentes al sistema de seguridad social en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado el actor

### **Costas procesales**

Finalmente, en lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. si bien presentó un acuerdo conciliatorio, el cual no fue acogido por la parte actora, desde la contestación exteriorizó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas que se dejó de realizar cotizaciones obedeciendo al estricto cumplimiento de un deber legal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 692 de 1994, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales, como lo señaló la juez.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**CONFIRMA** la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de noviembre de 2023.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por **EDICTO**.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e251c5dc1c541ddac5c952bc31323edab473ddba16d42b94e721a5094f3a2b7e**

Documento generado en 12/03/2024 11:51:43 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>